

MÉXICO 2008: UN BARQUITO DE PAPEL EN UN MAR EMBRAVECIDO

▪ Luis Ignacio Román Morales ▪

Apenas hace un año fueron las elecciones presidenciales de 2006 y parece que hubiese pasado una eternidad. Sin embargo, debemos rescatar de nuestra memoria las promesas de campaña y confrontarlas con las decisiones que ahora se están tomando. María Elena Walsh, el equivalente argentino de Cri-Cri, escribió en una canción: “En el país del no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo”. Conviene entonces acordarse del presidente del empleo, de la famosa estabilidad macroeconómica y de evitar el peligro para México. ¿Cómo estamos un año después?

1. ¿Qué quiere hacer el gobierno? La política económica

El Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Felipe Calderón se basa en los mismos “ejes” de su campaña presidencial. El segundo de ellos se llama “Una economía competitiva y generadora de empleos”. ¿Cómo piensa lograrlo?

La idea básica es que para crear empleo se necesita que el país produzca más, que genere más riqueza. Si aumenta la riqueza, la

gente tiene más dinero y con ello compra más cosas. Por lo tanto, se necesitan más trabajadores para lograr que dicha producción crezca y haya más empleo.

Para crecer, el gobierno plantea que se requiere más inversión privada: si vienen las inversiones, se construyen empresas y se crean los empleos que van a permitir que aumente la producción.

Para que haya inversión privada el gobierno piensa que se le debe dar más facilidades al inversionista privado para que venga: ello puede implicar dar subsidios y facilidades (reducción o exención de impuestos), menos trámites administrativos y, sobre todo, reformas estructurales que faciliten la inversión.

¿Cuáles son estas famosas reformas estructurales que no logró Fox? Básicamente se refiere a la reforma fiscal (como el impuesto de un mismo porcentaje sobre las utilidades de las empresas y algunos trabajadores independientes); a la reforma de los energéticos (electricidad y petróleo) para permitir una mayor inversión privada; a la reforma laboral para facilitar la contratación y el despido de trabajadores, así como formas de pago por horas y la mayor posibilidad de subcontrataciones; la reforma en comunicaciones y la famosa reforma del Estado, que tanto revuelo causó por el enojo de Televisa y TV Azteca.

Desde esta lógica de reformas estructurales se facilitan las cosas para los grandes inversionistas y se le complican a los trabajadores, a los micro y pequeños empresarios y a las capas medias de la población (como los profesionistas independientes). Se favorece a quienes tengan más riqueza, para evitar que saquen su dinero del país y por el poder político que tienen.

Pero para lograr las *reformas estructurales* el gobierno plantea que se necesita mantener lo que llama la estabilidad macroeconómica: esto es, controlar la inflación, el gasto del gobierno, la paridad del peso con

el dólar y que los dólares que gasta México sean más o menos equivalentes a los que recibe.

En suma, según el gobierno, para que haya empleo debe haber crecimiento, para que haya crecimiento debe haber inversión privada y para que ésta se dé se deben facilitar las cosas a los inversionistas privados. Hay que hacer reformas para favorecerlos, mantener la inflación baja y el tipo de cambio del peso contra el dólar estable.

Entonces, ya no queda claro cuál es la prioridad del gobierno... si para que haya empleo tiene que darse todo lo demás, entonces es ese *todo lo demás*, lo realmente prioritario, comenzando por la famosa estabilidad macroeconómica y siguiendo con las facilidades para la gran inversión privada. En otras palabras, tal pareciera que para ayudar a los más pobres y generar empleo lo que hay que hacer es privilegiar a los más ricos y desproteger más a los trabajadores.

Pero si en la realidad la primera prioridad es mantener la “estabilidad macroeconómica” cabe preguntarse de qué depende ésta.

2. ¿De veras somos tan estables?... El barquito de papel

Ya mencionamos líneas arriba lo que el gobierno, las cámaras empresariales y los principales medios de comunicación nos dicen qué es la estabilidad macroeconómica, pero esa definición no coincide con lo que aparece en los libros de economía. Según los principales textos de macroeconomía (Samuelson, Dornbusch, Stiglitz), cuando nos referimos a la macroeconomía no sólo hablamos de dinero y de comercio, sino también de producción (generación de riqueza, empleo) y distribución del ingreso. En estos indicadores México no está bien ni estable: la producción está estancada, la generación de empleo es insuficiente y se basa en trabajos precarios o muy inestables (como la subcontratación), y la distribución de la riqueza es pésima (México es uno de los

15 países más inequitativos del mundo). Cuando nos dan una visión de la “macroeconomía” que sólo incluye algunas de sus partes y oculta otras, nos dan una verdad a medias... la verdad que conviene a quienes les interesa que se sigan las mismas políticas. ¿Es ésa la verdad que le conviene a la inmensa mayoría de los mexicanos?

Pero supongamos que de veras fuéramos estables y que esa estabilidad se refleja en baja inflación, en que no haya devaluación del peso, en que el gobierno no esté gastando de más y en que el país no se esté endeudando más con el resto del mundo. ¿A qué le debemos esa estabilidad?, ¿a que el gobierno está haciendo muy bien las cosas y que hacerlas de otra manera hubiera sido “un peligro para México”? Vamos a ver.

Si todos consumimos riqueza (comida, ropa, gastos de la casa, transportes, servicios de educación, de salud, etc.), para poder seguir consumiendo también necesitamos producir nueva riqueza. Si consumimos sin producir, cada vez habría menos riqueza y la que quedara sería cada vez más cara. Además, la población está creciendo y se necesita aumentar la producción de riqueza para que puedan consumir cada vez más habitantes. Adicionalmente, se consumen más artículos que antes no existían, por los que hay que producir riqueza para tener el dinero que permita comprarlos. En suma, necesitamos producir cada vez más riqueza.

Si el país no está aumentando su producción de riqueza, o la aumenta muy poquito (en menor proporción que las necesidades de consumo de sus habitantes), entonces hay menos riqueza por habitante, lo que la vuelve más peleada. El pleito se resuelve mediante los precios (“el que quiera azul celeste que le cueste”), lo que quiere decir que tendríamos mayor inflación.

Sin embargo, aunque la riqueza no está creciendo en México al mismo ritmo que la cantidad de gente que trabaja y requiere esa

riqueza, las cifras de inflación parecen estables, lo cual no resulta lógico. Además, si la producción no crece, no aumenta el empleo y entonces la población no tiene más ingresos. Sin embargo, las estadísticas nos dicen que la población sí está comprando más cosas (aumenta la demanda de bienes y servicios).

Estas contradicciones se explican, en principio, por dos causas: por una parte, los precios no aumentan porque, aunque no se produzca más, sí hay más bienes en el mercado, pero se producen en otro lado, es decir, son bienes importados. Por otra parte, si la población gasta más sin tener mayores ingresos, entonces estaría endeudándose. En otras palabras, estaríamos endeudándonos para consumir lo que no producimos.

Sin embargo, esa explicación también es problemática. Si fuese cierto, entonces la baja producción no permitiría exportar y el crecimiento de las importaciones llevaría a un mayor endeudamiento del país con el resto del mundo; sería más difícil conseguir dólares (porque no aumentamos nuestras exportaciones) y, por lo tanto, el dólar sería cada vez más caro, lo cual significa que el peso se estaría devaluando... Pero tampoco eso está pasando. México no está gastando dólares de más respecto a los que recibe y el dólar está estable o incluso se está abaratando un poco.

Vuelve entonces la pregunta de la macroeconomía, ¿cómo hacemos para tener estabilidad de precios y de paridad del peso con el dólar si no estamos creciendo, ni generando empleo suficiente, ni de buena calidad?

La respuesta no está en lo que el gobierno esté haciendo bien, sino en factores que van más allá del país.

México es el país número 16 en las reservas mundiales de petróleo, pero es el sexto en la producción mundial. Esto significa que quizá seamos el que más rápidamente está agotando sus reservas de petróleo,

porque a los precios actuales eso permite obtener decenas de miles de millones de dólares que de otra forma no obtendríamos (se estima una exportación de más de 30,000 millones de dólares en 2007). En otras palabras, podemos aumentar nuestro consumo sin generar empleo ni riqueza, mientras nos agotamos el patrimonio que nos queda de nuestro principal recurso natural; al ritmo actual de producción (y de desperdicio) tenemos petróleo sólo para siete años más.

Pero el petróleo no es la única fuente de dólares: la segunda más importante son las remesas del exterior, que en 2007 fueron de alrededor de 25,000 millones de dólares. Estas remesas se deben principalmente a los envíos de los trabajadores que se van a Estados Unidos. Muchos de ellos son los que no consiguen un trabajo aceptable en México y tienen que salir del país para sostener a sus hogares. En una lógica de libre mercado podríamos decir que los que no hallaron un trabajo que les permitiese sobrevivir aquí es porque no eran suficientemente productivos. En cambio, los muy productivos serían los que tienen una alta capacidad de consumo (y hasta de derroche).

Sin embargo, a la empresa que produce coches de lujo no le interesa que le paguen en pesos, lo que quiere son dólares, euros o yenes, porque sus dueños y sus empresas están principalmente en Estados Unidos, en Europa o en Japón. Entonces, cuando se compra un coche en México, hay que convertir los pesos que se paga por él a dólares, y de dónde salen esos dólares... del petróleo y de los trabajadores migrantes. En otras palabras, el trabajo, la miseria, los riesgos y las humillaciones que sufren los que aquí eran considerados como “no productivos” permiten tener las divisas para financiar el derroche de los que son “muy productivos”.

Esta situación nos conviene a los que podemos consumir, regularmente, una buena cantidad de productos importados buenos y baratos. Supongamos que México de veras generara los empleos que se

necesitan para que los trabajadores no tuvieran que dejar a su familia, su país, su idioma y su historia. Esos trabajadores ganarían en México menos de la quinta parte de lo que ganan en Estados Unidos, y además les pagarían en pesos y no en dólares; con eso no ingresarían más dólares al país y los productos importados serían más caros. Entonces, a los que disponemos de suficiente dinero parece que nos conviene que los que no lo tienen se sigan yendo a Estados Unidos y sigan sosteniendo nuestro consumo importado, que no genera empleo ni riqueza nacional.

Además del petróleo y de los migrantes, hay otras fuentes para obtener dólares: una de ellas es el ingreso de divisas resultantes del comercio ilegal. La más importante de este comercio es el narcotráfico, pero no es la única: el negocio del tráfico de seres humanos indocumentados es altamente rentable, no sólo de mexicanos, sino también de centroamericanos, sudamericanos o asiáticos que, al igual que los mexicanos, tratan de fugarse a Estados Unidos para poder sostener a sus hogares y a ellos mismos; ellos son una gran fuente de ganancias y de divisas para los polleros, así como para las autoridades y los transportistas coludidos. Otra fuente de divisas es el tráfico de mercancía robada, de joyas arqueológicas o de biodiversidad. Una más es el asesinato: un niño de la calle, sin registro de ningún tipo, puede ser víctima de traficantes de órganos humanos: los riñones, córneas, hígados y corazones son muy bien cotizados en los mercados internacionales. En suma, todas estas actividades nos proveen de dólares y mantienen nuestra “estabilidad macroeconómica”; lo paradójico es que tal estabilidad dependa parcialmente de nuestra inseguridad personal, del riesgo de nuestra salud física y mental y de la pérdida de nuestro patrimonio histórico y natural.

Pero aún no es todo, también tenemos dólares gracias al ingreso de capital especulativo, en especial en la bolsa de valores. Actualmente,

cerca de la mitad de la inversión extranjera no está en la creación de nuevas empresas o empleo, sino en la compra y venta de documentos de deuda (obligaciones) o de propiedad de empresas (acciones), para incrementar sus utilidades. Esta inversión llega para atraer ganancias rápidamente y puede irse en un instante, dejando al país sin dólares ni siquiera para mantener la operación básica de su aparato productivo o la compra de bienes básicos. Esto es lo que nos pasó en 1994 y nos puede volver a pasar si seguimos dependiendo de esta manera de la entrada de dólares especulativos (capital golondrino).

En suma, el agotamiento del petróleo, la expulsión de nuestros compatriotas y de nuestros hermanos de otros países, las actividades criminales y la especulación sostienen, en gran parte, nuestra famosa estabilidad. ¿Es ésta la estabilidad que debemos mantener? Con esta forma de supuesta estabilidad defendemos el argumento de que hay que darle más beneficios a los económicamente más poderosos porque ellos son los que van a generar los empleos que necesitamos.

Todo lo dicho en este apartado parte del supuesto de que los originalmente inestables somos nosotros y de que “los de afuera” (en especial Estados Unidos), son los estables. ¿Pero realmente ellos lo son?

3. La debilidad del dólar y de los Estados Unidos: el mar embravecido

Desde 1973, hace 35 años, los dólares estadounidenses no necesitan tener ningún respaldo efectivo en la producción de ese país, en la disponibilidad de metales preciosos o en las reservas que tengan de otras monedas. Dicho en otras palabras, Estados Unidos ha sido el único país que puede comprar lo que produce el resto del mundo a cambio de papel o de información almacenada en computadoras.

Mucho se ha hablado durante décadas de la deuda externa de México, de América Latina, pero el país más endeudado del mundo es Estados Unidos. Está endeudado el gobierno para financiar sus campañas bélicas, está endeudado su sector privado para especular e invertir en todo el mundo, y ahora también están endeudados los hogares de ese país, víctimas de la ilusión de que la riqueza crecía por sí sola.

En los últimos años los hogares estadounidenses se endeudaron enormemente para adquirir patrimonio, en particular casas. Compraban a crédito con la expectativa de que las propiedades aumentarían, de manera constante, de precio y que vendiéndolas unos años después podrían pagar su deuda y tener una ganancia adicional. De igual modo, el consumo corriente también depende cada vez más del crédito, sobre todo mediante el uso generalizado de las tarjetas bancarias.

Sin embargo, si la riqueza real no crece, no hay recursos para que los precios de los bienes raíces crezcan cada vez más ni para sostener el consumo de los bienes básicos. Es entonces cuando los precios de las viviendas en Estados Unidos se derrumban, sus compradores entran en cartera vencida y las empresas hipotecarias comienzan a quebrar. Es evidente que esto afecta la capacidad de consumo de la población, cada vez más endeudada, y para mantener el nivel de producción se ha tratado de favorecer sus posibilidades de consumo, mediante la reducción de las tasas de interés estadounidense, y con ello la promoción de que sigan consumiendo a crédito.

Al mismo tiempo, la generación de riqueza industrial y agropecuaria tiende a desplazarse de continente: China y la India son los países que más crecen, mientras que los europeos son los que tienen mayor solidez en su moneda (el euro). Se reduce, entonces, el poder económico de Estados Unidos y, por lo tanto, de su moneda.

Así, ese país tiene cada vez más problemas para crecer, generar empleo y mantener la fortaleza de su moneda. Ésta es una pésima noticia para México, tanto en la posibilidad de vender sus productos en Estados Unidos, como en la de que sus trabajadores se empleen en ese país y que las reservas en dólares le permitan importar los productos que necesita.

En efecto, se dice que las reservas de México son altísimas, puesto que superan los 77,000 millones de dólares, ¿pero para qué queremos esos dólares?, evidentemente para garantizar nuestras importaciones. El precio de los bienes básicos ha evolucionado de tal manera que si midiéramos nuestras reservas ya no en dólares, sino en las toneladas de maíz, de trigo, de cobre o de acero que esos dólares pueden comprar, en barriles de petróleo o en volumen de metales preciosos, entonces tales reservas se estarían reduciendo de manera constante. En otras palabras, para evitar nuestra caída estamos muy bien agarrados de una pared que se llama dólar estadounidense, pero esa pared está profunda y estructuralmente agrietada.

Los efectos inmediatos de una recesión de aquel país sobre México se ubican en varios planos:

- El incremento en los precios de las materias primas en el nivel internacional trae aparejada una presión para que se incrementen los precios en Estados Unidos. Esta inflación se expandiría hacia los bienes finales, incluyendo bienes de consumo familiar, bienes intermedios y bienes de capital. De darse esta situación, México importaría una inflación significativa de Estados Unidos (los bienes importados serían cada vez más caros), lo que a su vez repercutiría sobre la inflación general de nuestro país. De hecho, esto ya se expresa por los incrementos en los precios del maíz, y por consiguiente de la tor-

tilla en 2007, del precio del trigo y del pan, y por el actual aumento gradual en el precio de la gasolina.

- El aumento de precios ya está siendo significativamente mayor en la canasta básica. El índice nacional de precios al consumidor aumentó, en 2007, 4.6% para los hogares con ingreso familiar de hasta un salario mínimo y sólo 3.8% para los que contaron con ingresos superiores a los seis salarios mínimos. Ello se explica por la tendencia de reducción de precios de los bienes de consumo de alta tecnología (celulares, *lap-tops*, *i-pods*, y equipamiento microelectrónico en general), al tiempo que se incrementan de manera significativa los precios de bienes de consumo básico, en especial del alimentario. Aquellos hogares que le dedican una mayor proporción de su ingreso a la compra de básicos resultan proporcionalmente más perjudicados por la inflación que aquellos que le pueden destinar una mayor parte de su gasto a la compra de los bienes que se están abaratando. En estas condiciones, el incremento de 4% en los salarios mínimos para 2008 implica un deterioro en el poder de compra de los hogares con menores ingresos, mientras que ese mismo porcentaje hubiera sido relativamente correcto en los grupos con altas remuneraciones. Sin embargo, es más probable que sean los grupos de mayor ingreso quienes tengan aumentos más significativos. Es decir, seguimos polarizando las condiciones sociales.
- Una recesión en Estados Unidos vendría acompañada de un deterioro en su mercado y sus ventas, lo que a su vez detendría la inversión y el empleo. Esto afectaría especialmente a la población más susceptible de ser despedida o precarizada aún más, en otros términos, a los trabajadores indocumentados. Si la migración internacional ha sido una gran válvula de escape frente a la escasez de empleo digno y bien remunerado en México, lo anterior significa que tal

válvula se estaría cerrando, lo que repercutiría sobre la gravedad del problema del empleo en México.

- Además, la menor absorción o el despido de trabajadores mexicanos en Estados Unidos, aunado a condiciones de trabajo que podrían deteriorarse aún más, reduciría las posibilidades de que tales trabajadores mantuviesen el crecimiento del envío de remesas a México; esto implicaría, en el nivel macroeconómico, un aumento en el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos y, en el nivel de los hogares y las regiones, afectaría principalmente a las regiones que más expulsan trabajadores y a los hogares que dependen, en gran medida, del envío de transferencias por parte de sus familiares en Estados Unidos.
- La recesión estadounidense también implicaría una reducción de sus importaciones y esfuerzo mayores de esa economía para aumentar sus exportaciones, lo que se traduciría en el comportamiento opuesto en México, es decir, una reducción de nuestra capacidad de exportación (sobre todo manufacturera) y un aumento de nuestras importaciones provenientes de Estados Unidos. De darse esta situación se agravaría nuestro déficit comercial y con ello habría una mayor inestabilidad en la paridad monetaria.
- Por último, México depende enormemente de la esfera financiera estadounidense. Las tasas de interés nacionales y la bolsa de valores se comportan, en gran medida, dependiendo de lo que pasa con sus equivalentes en Estados Unidos. Como nuestro país está aumentando su dependencia del ingreso de divisas, del funcionamiento de la bolsa de valores, un comportamiento de ésta también afectaría la entrada de divisas a México y, por lo tanto, los recursos para mantener la llamada estabilidad financiera.

Después de todo esto resultan sorprendentes las declaraciones políticas que afirman que México está blindado ante la posible recesión estadounidense y de que su ciclo económico puede independizarse del de aquel país.

Es notorio que actualmente una gran parte de los países que más están creciendo (China y la India, notablemente) estén en un proceso acelerado de diversificación de sus reservas, de sus fuentes de ingreso y de sus mercados, con el fin de depender menos de Estados Unidos. Son también destacables los ejemplos de las economías sudamericanas que buscan depender más de sus propios recursos financieros (en la que juega un papel muy importante el proyecto de Banco de Sudamérica). México no parece estar en esa sintonía, sino en una de profundización de su asociación con Norteamérica.

Estados Unidos mantiene un enorme poder mundial, tanto en el plano militar como en el político y en el económico. Su economía no se puede derrumbar, porque en las actuales condiciones afectaría gravemente la de todo el planeta. Sin embargo, se está produciendo un cambio histórico en las relaciones de poder económico internacional. El dólar estadounidense es cada vez menos aceptado como moneda de cambio fuera de ese país. En ese entorno, México es quizá el que siga siendo más dependiente de Estados Unidos, de su moneda, de su mercado, de su tecnología y de sus empleos. De mantenerse y profundizarse esta dependencia, México será cada vez más vulnerable.

En estas condiciones, los riesgos de deterioro social son mayores en términos de empobrecimiento, de empeoramiento en la calidad del empleo y de inequidad. Por ello, es determinante el significado que tenga la política social del gobierno y de su óptica para enfrentar tales riesgos.

4. ¿Qué más quiere hacer el gobierno?: el lado económico de la política social

El objetivo explícito de la política social de la actual administración es “lograr el desarrollo humano y el bienestar de los mexicanos a través de la igualdad de oportunidades” (Plan Nacional de Desarrollo, PND, p.143). Por consiguiente, es necesario ubicar, tanto en el nivel gubernamental como en el debate académico, lo que se entiende por ésta.

En el PND no existe una definición clara sobre lo que es y lo que el gobierno entiende por igualdad de oportunidades. En todo caso, establece una relación entre igualdad de oportunidades, desarrollo humano y bienestar de las personas (perspectiva individual) al señalar: “El desarrollo humano y el bienestar de las personas, tanto de quienes viven en pobreza como del resto de los mexicanos, constituyen el centro de la acción del Gobierno en materia de igualdad de oportunidades” (p.143).

La enciclopedia Wikipedia señala que: “la igualdad de oportunidades es una forma de justicia social que propugna que un sistema es socialmente justo cuando todas las personas potencialmente tienen básicamente las mismas posibilidades de acceder al bienestar social y poseen los mismos derechos políticos y civiles” (http://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_de_oportunidades).

El planteamiento de la igualdad de oportunidades procede de la visión contractualista de Rawls, formulada a partir de los enfoques clásicos de Rousseau, Hobbes y Locke, en la que se propone que los seres humanos se organizan a través de un “contrato social”, en el cual se establecen las atribuciones y los límites de los individuos respecto a su sociedad.

El principio de la igualdad de oportunidades refiere el derecho de todos los individuos para acceder a la educación, a la cultura, a

la elección del trabajo y a desarrollar actividades empresariales. Este principio se completa con los de igualdad y de diferencia, siendo este último el que implica la toma de decisiones públicas que favorezcan más a los más desfavorecidos, lo que significa un traslado de recursos desde los grupos más privilegiados a los menos privilegiados.

Por lo tanto, la igualdad de oportunidades se plantea reforzar las capacidades individuales (en términos de posibilidades de acceso a la alimentación, educación, salud y bienes públicos) para que los individuos puedan competir en condiciones similares en los mercados, particularmente en el de trabajo. El supuesto implícito es que la desnutrición, la enfermedad, la ignorancia o la privación en el acceso a bienes públicos, impide la oportunidad de que el individuo compita de manera eficiente.

Por ello, el gobierno declara buscar la igualdad de oportunidades, aunque en la organización de su estrategia combinaría esta lógica con la del principio de diferencia. En cuanto a la igualdad de oportunidades, el PND abarca los aspectos de salud y educación, mientras que en el principio de diferencia, el Plan considera la atención a la población en situación de pobreza; grupos prioritarios como pueblos indígenas, igualdad entre mujeres y hombres, grupos vulnerables (los adultos mayores, niños y adolescentes en riesgo de calle, así como a las personas con discapacidad) y familia, niños y jóvenes. Por otra parte, agrega un apartado específico de política dirigida a cultura y esparcimiento: cultura, arte, deporte y recreación. En conjunto, estos aspectos se tratan en ocho apartados.

El eje de la política social está constituido por elementos referidos a tres lógicas, de acuerdo con los principios de Rawls: diferencia (en favor de grupos sociales específicos, a través de políticas focalizadas contra la pobreza), igualdad de oportunidades (en el caso del PND,

educación y salud) y estrategias complementarias (que en el Plan son las políticas orientadas al arte, la cultura y el deporte).

En la política para enfrentar la pobreza se desarrolla una perspectiva individualista de la misma, en la cual su superación depende de las capacidades de un individuo para insertarse en los mercados, como en el caso de la lógica original del Programa Oportunidades. Por consiguiente, la función del Estado se limita a proveer los instrumentos y las condiciones para que éstas sean generalizadas, evadiendo toda otra responsabilidad social del porqué el individuo no prospera.

En congruencia con lo anterior, se busca integrar a la población en proyectos productivos para elevar los ingresos de los sectores pobres. Para ello se refiere la construcción de posibilidades de asesoría, micro-financiamiento, desarrollo de vías de comunicación y medios de transporte, promoción de nuevas formas de turismo, apoyo a la agricultura y promoción de la inversión en zonas expulsoras de trabajadores. En general, las estrategias de esta segunda línea serían plausibles en un entorno de estabilidad productiva nacional e internacional, así como en el caso de una posibilidad de proteger a los productos agropecuarios nacionales; sin embargo, ese entorno es diametralmente opuesto al que se está advirtiendo para este año. Baste señalar la plena liberalización de los productos agropecuarios básicos (maíz, caña de azúcar, leche y carne), en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

De igual modo se plantea una política de ordenamiento territorial, para atraer inversión y mejorar las condiciones de empleo e ingreso de la población. De nuevo esta idea se enfrenta a las restricciones del futuro inmediato.

En cuanto a las políticas hacia grupos sociales específicos, el Plan Nacional de Desarrollo le otorga un espacio especialmente importante a la población indígena. Sin embargo, el tipo de políticas planteadas

no difieren, de manera significativa, del esquema de las planteadas en términos generales para enfrentar la pobreza, es decir, políticas focalizadas, vías de comunicación, medios de transporte, ordenamiento territorial, etc. Además, se otorga un mayor papel a la jurisdicción del Estado (lo que puede contravenir la búsqueda de las autonomías indígenas), una mayor promoción de sus valores y tradiciones, y un mayor aprovechamiento de sus recursos y patrimonio, lo que también puede afectar el propio control que tengan de sus recursos.

En lo que toca a los grupos sociales específicos se aborda la problemática de la desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y como primeros pasos se reiteran las políticas focalizadas de educación y salud, para elevar la atención médica y la escolarización femenina; sin embargo —y puesto que la perspectiva de género sería transversal al conjunto de las políticas—, no se explicita cómo se daría esa transversalidad en el resto del PND.

El Plan también trata la perspectiva de los diversos grupos de edad, destacando las problemáticas y las políticas específicas hacia niños, adolescentes (en especial aquellos en riesgo de situación de calle), jóvenes y adultos mayores, así como acciones hacia población con discapacidades. En cuanto a la lógica de los grupos de edad, se reproduce el esquema de focalización ya descrito, aunque resalta la inexistencia de consideraciones específicas para la población de 30 a 70 años de edad; tal pareciera que ésta sólo puede ser objetivo de estrategias generales, en las que su problemática, su preparación para el futuro y el reconocimiento a su historia son desdeñados. En cuanto a la población con discapacidades, el PND no explicita a quiénes se les considera “discapacitados”. Al no tener en claro el concepto de discapacidad no resulta factible emprender acciones generalizadas para las “personas discapacitadas”, ya que cada una tiene diferentes necesidades dependiendo de sus limitaciones.

Por lo que se refiere a las estrategias dirigidas a las familias, se plantea la creación de instituciones para brindarles apoyos diversos, de esquemas de apoyo alimentario para las que más lo requieran y de políticas con una perspectiva familiar, lo que implica un abordaje y problemática similar a la enunciada en la perspectiva de género.

En lo concerniente a las políticas de salud, su enfoque es eminentemente médico y farmacológico, sin considerar la incidencia negativa sobre la salud que ejercen factores no específicamente médicos y que son referidos a problemas estructurales y de políticas generales de desarrollo, tales como la inequidad en la distribución del ingreso, las pautas alimentarias que promueven el consumo de alimentos chatarra, la inseguridad vial o la contaminación. Sólo de manera marginal se abordan cuestiones tales como las deficientes condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, por citar algunos ejemplos.

Por lo que respecta a la educación, se propone una mejora en la calidad, basada en mecanismos de evaluación a estudiantes y profesores, mayores procesos de capacitación para estos últimos, actualización de programas de estudio y fortalecimiento del federalismo. Si bien este conjunto de aspectos es significativo, no se abordan asuntos fundamentales ligados a la estructura de poder en el sector, especialmente lo asociado con los controles sindicales. No se plantean modificaciones en procesos para definir los criterios de asignación de profesores a los planteles, de nombramiento de directores, supervisores, evaluadores y funcionarios. Cabría valorar la importancia de la lógica de las prácticas de control sindical en los problemas de calidad en el sistema educativo.

En cuanto a la interpretación sobre los factores detonantes de la pobreza, se privilegia la interpretación basada en la falta de educación (escolaridad), asociada a los hogares en situación de pobreza. Si bien la relación educación–ingreso es clara, la causalidad lo es menos: ¿La

población es pobre por sus problemas educativos o la población tiene problemas educativos por la situación de pobreza en la que ha vivido? Un tratamiento desde esta segunda posibilidad permitiría abordar la pobreza más por factores sociales de inequidad y funcionamiento pernicioso del sistema económico y no por características individuales de la población en situación de pobreza.

Evidentemente, lo anterior no excluye la necesidad de establecer políticas específicas de mejora en la cobertura y calidad educativa, especialmente en las zonas de mayor marginación.

Cabe mencionar que estas concepciones operativas de la política social son también referibles a la política ambiental. Baste señalar que si bien en el PND se concibe la sustentabilidad ambiental como “la administración eficiente y racional de los recursos naturales, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras” (p.234), este referente común se remite a la búsqueda de competitividad, asociada a su vez a la concepción general de la política económica. Así, se enuncia como principal reto el “incluir al medio ambiente como uno de los elementos de la competitividad y el desarrollo económico y social, ya que considera que solo así se puede alcanzar un desarrollo sustentable” (p.234).

5. Conclusión

Ninguna sociedad está predestinada al fracaso. De las situaciones más adversas se han levantado muchos países, desde los destrozados por las guerras hasta los derrumbados por crisis económicas. México mismo es un ejemplo de cómo se pudo reactivar, desde la década de los treinta del siglo pasado, una nación azotada por una guerra revolucionaria que costó un millón de vidas y la destrucción de gran parte de

su infraestructura productiva; que luego sufrió otra guerra (la cristera) y después fue víctima de la principal crisis en la historia del capitalismo (la gran depresión de 1929–1933). El crecimiento posterior se acompañó de fuertes procesos de control corporativo del poder, de exclusión social, de concentración del ingreso y de corrupción, pero se demostró que nuestra sociedad (como muchas otras) podía levantarse de una situación económica lamentable.

México no está ahora en una situación tan crítica, pero vive en un mar embravecido, tanto por lo que ocurre dentro como fuera del país. Seguir manteniendo el rumbo es seguir agravando los riesgos. Optar por otro camino, uno que realmente privilegie la sustentabilidad ambiental, el empleo y la equidad también implica nuevos riesgos, pero el principal peligro no está en las decisiones que se orienten en favor de la inmensa mayoría de la población y en la búsqueda de mayor justicia, equidad y soberanía. El gran peligro para México es mantener y profundizar una estructura de privilegios para unos cuantos; continuar con políticas que en el discurso son protectoras del medio ambiente y en los hechos contribuyen a su destrucción; seguir con una subordinación completa hacia la economía de Estados Unidos y la evolución de su moneda. Lo alternativo implicaría riesgos, pero no la certeza de que vamos hacia un país que pierda viabilidad en su desarrollo social, económico y ambiental.